

**PROYECTO DE LEY DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA**

|  |    |
|--|----|
| <b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b> .....   | 2  |
| <b>TÍTULO I</b> .....  | 8  |
| <b>Disposiciones Generales</b> .....   | 8  |
| <i>Artículo 1. Objeto</i> .....  | 8  |
| <i>Artículo 2. Ámbito de aplicación</i> .....  | 8  |
| <i>Artículo 3. Fines y principios informadores de las normas sobre convivencia en los centros docentes</i> .....   | 9  |
| <i>Artículo 4. Fines y principios informadores de las normas sobre participación directa de las familias en la enseñanza y en el proceso educativo</i> ..... | 9  |
| <b>TÍTULO II</b> .....   | 10 |
| <b>Derechos y deberes de convivencia y participación directa</b> .....   | 10 |
| <i>Artículo 5. Disposición general</i> .....   | 10 |
| <i>Artículo 6. Derechos y deberes de las madres y padres o tutoras o tutores</i> .....   | 10 |
| <i>Artículo 7. Derechos y deberes del alumnado</i> .....   | 11 |
| <i>Artículo 8. Derechos y deberes del profesorado</i> .....  | 12 |
| <i>Artículo 9. Derechos y deberes del personal de administración y de servicios</i> .....  | 13 |
| <b>TÍTULO III</b> .....  | 14 |
| <b>Normas básicas de convivencia en los centros docentes</b> .....   | 14 |
| <b>CAPÍTULO I</b> .....  | 14 |
| <b>Disposiciones generales</b> .....   | 14 |
| <i>Artículo 10. Plan de convivencia y normas de convivencia</i> .....  | 14 |
| <i>Artículo 11. Condición de autoridad pública del profesorado</i> .....   | 14 |
| <i>Artículo 12. Incumplimiento de las normas de convivencia</i> .....  | 15 |
| <i>Artículo 13. Responsabilidad y reparación de daños</i> .....  | 15 |
| <b>CAPÍTULO II</b> .....   | 16 |
| <b>Conductas contrarias a la convivencia y su corrección</b> .....   | 16 |
| <b>Sección 1.ª</b> .....   | 16 |
| <b>Conductas contrarias a la convivencia</b> .....   | 16 |
| <i>Artículo 14. Clases de conductas contrarias a la convivencia</i> .....  | 16 |
| <i>Artículo 15. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.</i> .....  | 16 |
| <i>Artículo 16. Conductas leves contrarias a la convivencia</i> .....  | 17 |
| <i>Artículo 17. Prescripción de las conductas contrarias a la convivencia</i> .....  | 18 |
| <b>Sección 2.ª</b> .....   | 18 |
| <b>Medidas correctoras</b> .....   | 18 |
| <i>Artículo 18. Principios generales de las medidas correctoras</i> .....  | 18 |
| <i>Artículo 19. Programas y actuaciones complementarias a las medidas correctoras</i> .....  | 19 |
| <i>Artículo 20. Procedimientos conciliados de resolución de los conflictos</i> .....   | 19 |
| <i>Artículo 21. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia</i> .....  | 19 |
| <i>Artículo 22. Medidas correctoras de las conductas leves contrarias a la convivencia</i> .....   | 20 |
| <i>Artículo 23. Graduación de las medidas correctoras</i> .....  | 20 |
| <i>Artículo 24. Prescripción de las medidas correctoras</i> .....  | 21 |
| <b>Sección 3.ª</b> .....   | 21 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Procedimiento para la imposición de las medidas correctoras.....</b>  | <b>21</b> |
| <i>Artículo 25. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia .....</i>        | <i>21</i> |
| <i>Artículo 26. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductas leves contrarias a la convivencia .....</i>                   | <i>22</i> |
| <i>Artículo 27. Responsabilidad de las madres y padres o tutoras o tutores .....</i>   | <i>23</i> |
| <b>CAPÍTULO III.....</b>   | <b>23</b> |
| <b>Prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar.....</b>   | <b>23</b> |
| <i>Artículo 28. Acoso escolar .....</i>  | <i>23</i> |
| <i>Artículo 29. Protección integral de las víctimas .....</i>  | <i>23</i> |
| <i>Artículo 30. Medidas para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de acoso escolar.....</i>                                   | <i>23</i> |
| <b>TÍTULO IV.....</b>  | <b>24</b> |
| <b>Participación directa de las familias y de los restantes miembros de la comunidad educativa en la enseñanza y en el proceso educativo .....</b> | <b>24</b> |
| <i>Artículo 31. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza ..</i>  | <i>24</i> |
| <i>Artículo 32. Principios generales y garantías de los procedimientos de consulta y participación directa .....</i>                               | <i>25</i> |
| <i>Artículo 33. Acceso de las madres y padres o tutoras o tutores al profesorado y a los equipos directivos de los centros docentes .....</i>      | <i>25</i> |
| <b>DISPOSICIONES ADICIONALES .....</b>   | <b>26</b> |
| <i>Disposición Adicional Primera. Asistencia jurídica al profesorado .....</i>   | <i>26</i> |
| <i>Disposición Adicional Segunda. Medios electrónicos de comunicación .....</i>  | <i>26</i> |
| <i>Disposición Adicional Tercera. Medidas complementarias .....</i>  | <i>26</i> |
| <i>Disposición Adicional Cuarta. Centros personales sostenidos con fondos públicos. ....</i>   | <i>26</i> |
| <i>Disposición Adicional Quinta. Guarda y acogimiento. ....</i>  | <i>27</i> |
| <b>DISPOSICIONES TRANSITORIAS.....</b>   | <b>27</b> |
| <i>Disposición Transitoria Primera. Procedimientos disciplinarios en tramitación ....</i>  | <i>27</i> |
| <i>Disposición Transitoria Segunda. Normativa reglamentaria de desarrollo .....</i>  | <i>27</i> |
| <b>DISPOSICIONES DEROGATORIAS .....</b>  | <b>27</b> |
| <i>Única. Derogación normativa .....</i>   | <i>27</i> |
| <b>DISPOSICIONES FINALES .....</b>   | <b>27</b> |
| <i>Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario .....</i>  | <i>27</i> |
| <i>Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.....</i>  | <i>28</i> |

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **I**

La convivencia en los centros docentes constituye en todas las sociedades desarrolladas un motivo de preocupación creciente, que no se circunscribe únicamente a los problemas que supone el mantenimiento de la disciplina en las aulas, sino también a las relaciones entre el propio alumnado, lo que llevó a tomar conciencia de la gravedad que revisten fenómenos como el acoso escolar. Galicia no es ajena a esta realidad, y el hecho de que, con carácter general, la situación de la convivencia en los centros docentes no alcance un nivel de deterioro grave no debería eximir a los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para propiciar un ambiente educativo que haga posible el pleno cumplimiento de los fines de la educación. La preocupación por los fenómenos de mala convivencia y de acoso escolar en los últimos tiempos comienza a ser, tristemente, una noticia cotidiana. Igualmente, existe una demanda latente por parte de los profesionales de la educación de reconocimiento de su labor y de dotación de herramientas que permitan atajar de una manera inmediata y eficaz las eventuales conductas que atenten contra el normal desarrollo de la actividad docente.

Consciente de todo esto, la Comunidad Autónoma pretende a través de esta ley crear y reforzar los instrumentos jurídicos que permitan conseguir y mantener un clima de convivencia de calidad y que, simultáneamente, dignifiquen la profesión docente. En este sentido, la Comunidad Autónoma gallega tiene atribuida en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía competencia plena sobre la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía, por lo cual le corresponde la responsabilidad, en el marco de la legislación estatal citada, de regular la convivencia en los centros docentes y entre todos los miembros de la comunidad educativa.

La presente ley parte de la convicción de que sin un ambiente de convivencia en los centros educativos basado en el respeto mutuo no es posible dar cumplimiento a los fines de la educación, ni permitir el aprovechamiento óptimo de los recursos educativos que la sociedad pone a disposición del alumnado y, por lo tanto, de las familias. Para conseguir este objetivo es necesaria la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa –madres y padres, profesorado, personal de la administración y servicios y alumnado -, así como de la propia Administración educativa. La ley incide muy especialmente en la corresponsabilidad de las madres y padres o tutoras o tutores en dicha tarea y, por eso, vincula la regulación de la convivencia en los centros docentes al establecimiento de canales para la participación directa de aquellos en la enseñanza y en el propio proceso educativo. Asimismo, pretende recoger las legítimas aspiraciones del profesorado de ver reconocida debidamente su función por la sociedad y los poderes públicos, de disponer de las facultades necesarias para el mantenimiento de la disciplina escolar y de recibir la protección jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.

## II

La ley consta de un primer título en el que se define su objeto, ámbito de aplicación y principios informadores. De acuerdo con lo que se acaba de decir, el objeto de esta ley vincula la regulación de las normas básicas de convivencia en los centros docentes con la participación directa de las familias en el proceso educativo. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia. En cuanto a los principios informadores, se diferencian los relativos a las normas sobre convivencia en los centros docentes de los relativos a las normas sobre participación directa de las familias en el proceso educativo.

El primer grupo de principios parte del objetivo fundamental de garantizar un ambiente educativo de respeto mutuo que haga posible el cumplimiento de los fines de la educación e incluye, de manera expresa, la prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar mediante medidas eficaces, el reconocimiento al profesorado y a los miembros de los equipos directivos de los centros docentes de las facultades precisas para prevenir y corregir las conductas contrarias a la convivencia, así como de la protección jurídica adecuada a sus funciones y la corresponsabilidad de las madres y padres o tutoras o tutores en el mantenimiento de la convivencia en los centros docentes, que se concibe como uno de los principales deberes que a aquellos les corresponden en relación con la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.

El segundo grupo de principios se asientan en la participación de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza por los poderes públicos que garantiza el apartado 5 del artículo 27 de la Constitución Española y que ofrece una base constitucional sólida y jurídicamente incontestable a la regulación por la ley de procedimientos de consulta y participación directa de las familias en la enseñanza. Estos procedimientos en ningún caso sustituyen a los canales institucionalizados de participación en la misma y en el funcionamiento y el gobierno de los centros docentes previstos en la legislación educativa vigente, sino que abren nuevas vías de participación directa a la comunidad educativa y, en especial, a las madres y padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos o hijas, en las decisiones de la Administración educativa, respetando la autonomía de los centros para desarrollar la programación general de la enseñanza y la libertad docente y pedagógica del profesorado. A eso se le suma el objetivo de mejorar la comunicación entre el profesorado y las madres y padres, con el fin de facilitarles a estos el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que les corresponden en relación con la educación de sus hijos o hijas.

## III

El título segundo de la ley se ocupa de definir los derechos y deberes que, en relación con el objeto de la misma, corresponden a los distintos miembros de la comunidad educativa: madres y padres o tutoras o tutores, alumnado, profesorado y personal de la administración y servicios. Es preciso aclarar que en ningún caso se pretendió elaborar una enunciación completa de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, sino sólo destacar y, de ser el caso, desarrollar, aquellos derechos y deberes que mayor relación guardan con el objeto de la propia ley. Asimismo, en el caso de las madres y padres o tutoras

o tutores, se añadieron los derechos específicamente relacionados con la finalidad de la ley de posibilitar el establecimiento de canales de participación directa en el proceso educativo.

Mención separada merece el elenco de derechos y deberes del profesorado, en el que se plasma la intención de la ley de satisfacer las demandas de este sector en lo que se refiere a recuperar consideración social, a disfrutar de una protección jurídica integral en el ejercicio de sus funciones y a disponer de las facultades precisas para el mantenimiento de la disciplina escolar. Como contrapartida, y fruto de la convicción de que en una comunidad como la educativa los derechos implican también responsabilidades, se recogen los deberes correspondientes, que extienden al profesorado las exigencias de respeto mutuo en un marco de convivencia y les imponen un ejercicio responsable de las facultades que se les atribuyen, así como disponibilidad, en los términos que la normativa aplicable establezca, para la atención a las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado.

#### IV

La parte más extensa de la ley es su título tercero, estructurado en tres capítulos, que establece las normas básicas de convivencia en los centros docentes. En un primer capítulo de este título se establecen las disposiciones generales en la materia, que incluyen, en primer lugar, la delimitación del contenido del plan de convivencia y de las normas de convivencia con los que, según la vigente legislación general educativa, deben contar todos los centros docentes. En particular, en el artículo dedicado a este tema se aborda la cuestión, que dio lugar a importantes polémicas educativas, de la regulación del atuendo del alumnado, que se deja a la autonomía de cada centro en función de la situación socioeducativa del mismo, pero con la fijación de unos principios que deben servir de orientación y límite a la hora de establecer esa regulación.

En este capítulo se recoge también el reconocimiento al profesorado de la condición de autoridad pública, que produce dos efectos legales: la extensión al mismo de la protección del ordenamiento jurídico que corresponde a tal condición y la atribución de valor probatorio a los hechos que el profesorado constate en el ejercicio de sus funciones de corrección disciplinaria y que se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente. Asimismo, se atribuye al profesorado la facultad de requerir al alumnado, dentro del recinto escolar y también durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, la entrega de cualquier objeto, sustancia o producto que porte y que esté expresamente prohibido por las normas del centro, resulte peligroso para su salud o integridad personal o la de los demás miembros de la comunidad educativa o pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades docentes, complementarias o extraescolares. De esta forma, se dota al profesorado de un régimen jurídico que refuerza su protección legal y le proporciona las facultades necesarias para el mantenimiento de la disciplina escolar.

Conscientes de la extensión de parte de las conductas reprobables fuera de las aulas, la ley contiene la previsión de que pueden ser objeto de corrección disciplinaria no sólo las conductas contrarias a la convivencia realizadas por el alumnado dentro del recinto escolar, sino también las llevadas a cabo durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, incluida la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar, así como las que se producen fuera del recinto escolar en otras situaciones, siempre que estén

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los compañeros o a las compañeras o a otros miembros de la comunidad educativa, e incluso se preocupa por extender el ámbito de aplicación a aquellas conductas realizadas en un entorno tecnológico que trasciende al espacio físico. Esto permite dar respuesta a preocupantes fenómenos como el acoso escolar, que no se desarrollan única ni fundamentalmente dentro de los centros docentes, aun siendo clara su vinculación con la convivencia escolar.

Se incorpora al texto legal la obligación del alumnado de reparar los daños materiales o morales causados con las conductas contrarias a la convivencia; obligación que debe entenderse como medida educativa en el marco del proceso de formación integral del alumnado, por lo que deja a salvo el régimen de responsabilidad civil que pueda derivarse de tales conductas.

## V

Ya en el capítulo segundo de este título tercero se aborda la tipificación de las conductas contrarias a la convivencia y de las medidas correctoras de las mismas, así como la regulación del procedimiento para su aplicación.

En cuanto a las conductas contrarias a la convivencia, la Ley procura precisar y modernizar la tipificación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, añadiéndose al elenco actualmente aplicable la difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho a la honra, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa, las actuaciones que constituyan acoso escolar y portar cualquier objeto gravemente peligroso para la salud o la integridad personal del alumnado o de los demás miembros de la comunidad educativa. Por lo que se refiere a las conductas leves contrarias a la convivencia, la propia ley delimita algunas de ellas que se aplicarán de manera uniforme en todos los centros docentes, sin perjuicio del margen que estos mantienen para la tipificación de otros supuestos a través de sus propias normas de convivencia.

Las medidas correctoras de las conductas contrarias a la convivencia apenas se modifican con respecto al elenco actual, ya que la experiencia de su aplicación práctica demuestra que esa configuración es esencialmente acertada y operativa. No obstante, la ley incluye tres novedades en este terreno. La primera es la previsión, como complemento de dichas medidas, de la elaboración y desarrollo por el departamento de orientación de cada centro docente de programas de habilidades sociales dirigidos al alumnado que incurra reiteradamente en conductas disruptivas, con la finalidad de mejorar su integración en el centro docente, y también a aquel alumnado que, como consecuencia de la imposición de las medidas correctoras previstas, se vea temporalmente privado de su derecho de asistencia al centro. La segunda consiste en establecer criterios específicos de graduación de las medidas, que incluyen el reconocimiento espontáneo del carácter incorrecto de la conducta y, de ser el caso, el cumplimiento igualmente espontáneo de la obligación de reparar los daños producidos, la existencia de intencionalidad o reiteración, la difusión por cualquier medio de la conducta, la naturaleza de los perjuicios causados y el carácter especialmente vulnerable de

la víctima de la conducta, si esta se trata de un alumno o de una alumna, por razón de su edad, reciente incorporación al centro o cualquier otra circunstancia. Por último, se fijan plazos de prescripción claros que superan la regla actual de que las medidas correctoras prescriben a la finalización del curso escolar.

Es en el procedimiento de aplicación de las medidas correctoras donde más profunda es la reforma que esta ley lleva a cabo. En ella se combina el principio de que estas medidas tienen un carácter educativo que se frustra si no existe inmediatez entre su aplicación y la conducta que se pretende corregir, con el imprescindible respeto de los derechos y garantías de defensa del alumnado. Así, se prevé por una parte, el procedimiento aplicable en el caso de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, que es un procedimiento disciplinario con todas las garantías, aunque caracterizado por la brevedad de los plazos y la agilidad de su tramitación, al cual se acompaña un sistema especial de reclamación en vía administrativa que sustituye a los recursos administrativos ordinarios. Por otra parte, se regula la imposición de las medidas correctoras de las conductas leves contrarias a la convivencia, donde las formalidades se reducen considerablemente, aunque se mantiene en todo caso la garantía que supone la audiencia previa al alumnado. Por último, de acuerdo con la idea inspiradora de esta ley de que las madres y padres o tutoras o tutores son corresponsables del mantenimiento de la convivencia escolar, se impone la obligatoriedad para estos de la participación en los procedimientos de corrección disciplinaria cuando legalmente son convocados.

## VI

El capítulo III del título III de la ley contiene una novedad de gran calado: por primera vez se aborda en el plano legislativo el tratamiento de las situaciones de acoso escolar. Esto incluye, para empezar, la definición de estas situaciones, que se lleva a cabo de acuerdo con los criterios generalmente admitidos por la comunidad pedagógica e incluye la problemática derivada del uso de las nuevas tecnologías, a las que esta ley quiere prestar una especial atención. En segundo lugar, se consagran los principios de protección integral de las víctimas y de primacía del interés de estas en el tratamiento del acoso escolar, dirigidos específicamente a superar la práctica según la cual la única solución que admiten estas situaciones es el traslado de centro docente de la víctima, mientras los acosadores ven triunfar, en cierto modo, su actitud antisocial y contraria a la convivencia.

Finalmente, se dispone la incorporación a los planes de convivencia de los centros docentes de protocolos para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de acoso escolar, que preverán la realización de campañas de sensibilización de todos los miembros de la comunidad educativa contra el acoso escolar, el establecimiento de canales específicos que faciliten la exteriorización de estas situaciones por las víctimas y la determinación de las medidas que se deben adoptar en el caso de detección de una situación de acoso escolar para poner fin a la misma. Entre esas medidas estará necesariamente la designación por la persona titular de la dirección del centro o titular del centro concertado de una persona responsable de la atención a la víctima entre el personal del propio centro docente, para garantizar el derecho de la misma a la protección integral que esta ley le reconoce, sin perjuicio de la intervención de una mediación más profesional en caso de que la situación presente una gravedad especial.

## VII

El cuarto y último título de la ley aborda la regulación de la participación directa de las familias en la enseñanza y en el proceso educativo, de este modo se desarrolla mediante un instrumento específico el mandato establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación para hacer efectiva la colaboración entre la familia y la escuela. La Ley incorpora de este modo una nueva fórmula de participación que resulta respetuosa con las previsiones, contenidas en la legislación con rango de ley orgánica emanada del legislador estatal, relativas a la participación indirecta de la comunidad educativa a través de representantes de los distintos colectivos en los consejos escolares de centros. Del mismo modo el presente texto es compatible y respetuoso con la participación indirecta que establece la Ley 3/1986, del 18 de diciembre, de Consejos Escolares de Galicia, que se institucionaliza mediante órganos colegiados en el que participan los representantes de las familias y de los restantes estamentos de la comunidad educativa; Consejo Escolar de Galicia y consejos escolares de centros. Como ya se adelantó al hablar de los principios y fines inspiradores de esta ley, en este título se habilita expresamente a la Administración educativa para que pueda establecer procedimientos de consulta y participación directa de las familias dirigidos a hacer efectiva su implicación en el proceso educativo, procedimientos de los que los resultados podrán tener carácter meramente orientativo o, cuando así se considere, un mayor grado de vinculación para la Administración y los centros educativos, y que, en todo caso, contarán con las garantías para su correcta realización que resulten exigibles de acuerdo con la finalidad y el carácter de los mismos.

Conviene aclarar varios extremos en relación con estos procedimientos, para evitar cualquier interpretación equivocada de su significado y alcance. En primer lugar, su implantación es potestativa para la Administración educativa. En segundo lugar, su objeto son siempre aspectos concretos de la enseñanza, lo que deja a salvo la autonomía de los centros educativos para desarrollar esa programación general y, por supuesto, la libertad docente y pedagógica del profesorado. En tercer lugar, su naturaleza jurídica no se puede equiparar a la de un referéndum ni a la de una simple encuesta de opinión, sino que es estrictamente administrativa y procedimental; se trata de un canal de participación directa de los ciudadanos de acuerdo con los principios de una Administración democrática y participativa.

La participación directa se concibe, por tanto, como un elemento de opinión y de guía que maximiza el acierto de las decisiones educativas que debe adoptar la Administración, contando de este modo con un mayor consenso y configurándose como un elemento de valoración en la formación de la voluntad de la administración educativa cuando existen varias alternativas posibles para la adopción de un acto administrativo o la génesis de una norma que innove el ordenamiento jurídico.

Este título intenta también mejorar la participación de las madres y padres o tutoras o tutores en el proceso educativo por otra vía, la de garantizar la disponibilidad tanto del profesorado en general como de los miembros de los equipos directivos de los centros docentes para la atención a las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado. Con eso no se pretende imponer nuevas obligaciones al profesorado, sino dar respuesta a la demanda social de mayor accesibilidad al mismo por parte de las madres y padres o tutoras o tutores, mediante una distribución del horario semanal individual que tenga en cuenta que las horas de atención a



las madres y padres o tutoras o tutores de todo el profesorado, tengan o no la condición de tutoras o tutores o miembros de los equipos directivos, sean razonablemente compatibles con las obligaciones laborales y familiares de los primeros.

## VIII

Como disposiciones adicionales se incluyen algunas medidas complementarias del resto de las previsiones de esta ley. La primera, recogiendo de nuevo demandas del profesorado, contiene un mandato a la Administración educativa para que promueva las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros docentes públicos, sin perjuicio del derecho del que ya disfrutaban a la representación y defensa en juicio en los términos establecidos en la normativa reguladora de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia. La segunda trata de fomentar la utilización generalizada en los centros docentes de medios electrónicos de comunicación con las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado, con la pretensión de que eso contribuirá a agilizar la comunicación entre ambas partes y, por consiguiente, a mejorar la participación de las madres y padres o tutoras o tutores en el proceso educativo de sus hijos o hijas. Para acabar, la tercera disposición adicional prevé la adecuación del régimen de los miembros de los equipos directivos de los centros docentes a las funciones, tareas y responsabilidades que derivan de la aplicación de esta ley y acciones formativas específicas para el profesorado, dirigidas a prepararlo para el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de los deberes que, en relación con la convivencia escolar, le corresponden de acuerdo con el nuevo texto legal.

## TÍTULO I

### Disposiciones Generales

#### ***Artículo 1. Objeto***

Esta ley tiene por objeto regular las normas básicas de convivencia en los centros docentes comprendidos en su ámbito de aplicación y la participación directa de las familias así como del resto de la comunidad educativa en la enseñanza y en el proceso educativo, en ejercicio de las competencias sobre regulación y administración de la enseñanza atribuidas a la Comunidad Autónoma de Galicia en su Estatuto de Autonomía y en desarrollo de la legislación básica estatal sobre la materia.

#### ***Artículo 2. Ámbito de aplicación***

Lo dispuesto en esta ley es de aplicación en todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

### ***Artículo 3. Fines y principios informadores de las normas sobre convivencia en los centros docentes***

Las normas sobre convivencia en los centros docentes establecidas en esta ley se orientan a los siguientes fines, que informarán su interpretación y aplicación:

- a) La garantía de un ambiente educativo de respeto mutuo que haga posible el cumplimiento de los fines de la educación y que permita hacer efectivo el derecho y el deber de aprovechar de manera excelente los recursos que la sociedad pone a disposición del alumnado en el puesto escolar.
- b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
- c) La prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar mediante medidas eficaces.
- d) El reconocimiento al profesorado y a los miembros de los equipos directivos de los centros docentes de las facultades precisas para prevenir y corregir las conductas contrarias a la convivencia, así como de la protección jurídica adecuada a sus funciones.
- e) La corresponsabilidad de las madres y padres o tutoras o tutores en el mantenimiento de la convivencia en los centros docentes, como uno de los principales deberes que les corresponden en relación con la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.
- f) Promover la resolución pacífica de los conflictos y fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas, avanzar en el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa y la mejora de la convivencia escolar.

### ***Artículo 4. Fines y principios informadores de las normas sobre participación directa de las familias en la enseñanza y en el proceso educativo***

Las normas sobre participación directa de las familias y, de ser el caso, de los restantes miembros de la comunidad educativa en la enseñanza y en el proceso educativo, establecidas en esta ley se orientan a los siguientes fines, que informarán su interpretación y aplicación:

- a) La participación de todos los sectores afectados en la programación general de la enseñanza por los poderes públicos que garantiza el apartado 5 del artículo 27 de la Constitución Española y el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación.
- b) La regulación de procedimientos de consulta y participación directa de las familias, y, de ser el caso, de otros colectivos de la comunidad educativa, en la enseñanza, complementarios de los canales institucionalizados de participación en la misma y en el funcionamiento y el gobierno de los centros docentes previstos en la legislación educativa.

c) La mejora de la comunicación entre el profesorado y las madres y padres o tutoras o tutores para facilitar a estos el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que les corresponden en relación con la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.

## **TÍTULO II**

### **Derechos y deberes de convivencia y participación directa**

#### ***Artículo 5. Disposición general***

En el marco de lo establecido por la legislación básica de educación, los miembros de la comunidad educativa son titulares de los derechos y deberes de convivencia y participación que se regulan en este título.

#### ***Artículo 6. Derechos y deberes de las madres y padres o tutoras o tutores***

1. Las madres y padres o tutoras o tutores, en relación con la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas, son titulares de los siguientes derechos de convivencia y participación, sin perjuicio de los establecidos en las leyes orgánicas de educación:

- a) A ser respetados y a recibir un trato adecuado por la comunidad educativa.
- b) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas, para lo cual se les facilitará el acceso al profesorado y a los miembros de los equipos directivos de los centros docentes.
- c) A recibir información sobre las normas que reglamentan la convivencia en los centros docentes.
- d) A ser oídos, en los términos previstos por esta ley, en los procedimientos disciplinarios para la imposición de medidas correctoras de conductas contrarias a la convivencia de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.
- e) A participar en el proceso educativo a través de consultas y otros procedimientos de participación directa que establezca la Administración educativa.

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas, tienen los siguientes deberes:

- a) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado y los centros docentes.
- b) Conocer las normas establecidas por los centros docentes, respetarlas y hacerlas respetar, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado en el ejercicio de sus competencias.

- c) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
- d) Colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.

### ***Artículo 7. Derechos y deberes del alumnado***

1. Se reconoce al alumnado los siguientes derechos básicos de convivencia escolar, sin perjuicio de los establecidos en las leyes orgánicas de educación:

- a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente educativo de convivencia y respeto mutuo.
- b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
- c) A la protección contra toda agresión física o moral y, en particular, contra las situaciones de acoso escolar.
- d) A participar directamente en el proceso educativo cuando sean consultados por la administración educativa, en los términos previstos en el Título IV de esta Ley.

2. Son deberes básicos de convivencia del alumnado:

- a) Participar y colaborar en el avance de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros o compañeras a la educación.
- b) Respetar la dignidad y funciones y orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias, reconociéndolo como autoridad educativa del centro.
- c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
- d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente.
- e) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y los materiales del centro.
- f) Intervenir, a través de los canales reglamentarios, en todo aquello que afecte a la convivencia de sus respectivos centros docentes.
- g) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.
- h) Asistir a clase con puntualidad y con el material preciso.

### ***Artículo 8. Derechos y deberes del profesorado***

1. Al profesorado, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de la convivencia escolar, se les reconocen los siguientes derechos:

a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa y por la sociedad en general en el ejercicio de sus funciones.

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado en el que se preserve en todo caso su integridad física y moral.

c) A participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y de la educación integral del alumnado.

d) A que se les reconozcan las facultades precisas para mantener un adecuado ambiente de convivencia durante las clases y las actividades complementarias y extraescolares.

e) A la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes.

f) A participar directamente en el proceso educativo cuando sean consultados por la administración educativa en los términos previstos en el Título IV de esta Ley.

2. Son deberes del profesorado:

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar y la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.

b) Adoptar las decisiones oportunas y necesarias para mantener un adecuado ambiente de convivencia durante las clases y las actividades complementarias y extraescolares, corrigiendo, cuando le corresponda la competencia, las conductas contrarias a la convivencia del alumnado o, en caso contrario, poniéndolas en conocimiento de los miembros del equipo directivo del centro.

c) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de acoso escolar.

d) Informar a las madres y padres o tutoras o tutores sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas, cumpliendo las obligaciones de disponibilidad dentro del horario establecido en el centro para la atención a aquellos que les imponga la normativa aplicable.

e) Informar a los responsables del centro docente y, de ser el caso, a la Administración educativa de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva y sigilo profesional sobre la información y las circunstancias personales y familiares del alumnado.

### ***Artículo 9. Derechos y deberes del personal de administración y de servicios***

1. Al personal de administración y de servicios de los centros docentes, dentro del marco legal establecido y en el ámbito de la convivencia escolar, se les reconocen los siguientes derechos:

- a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa y por la sociedad en general en el ejercicio de sus funciones.
- b) A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve en todo caso su integridad física y moral.
- c) A participar, en el ejercicio de sus funciones, en el avance de la convivencia escolar.
- d) A la protección jurídica adecuada a sus funciones.
- f) A participar directamente en el proceso educativo cuando sean consultados por la administración educativa en los términos previstos en el Título IV de esta Ley.

2. Son deberes del personal de administración y de servicios:

- a) Respetar y colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para hacer que se respeten las normas de convivencia escolar y la identidad, integridad y dignidad personales de todos los miembros de la comunidad educativa.
- b) Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de acoso escolar.
- c) Informar a los responsables del centro docente y, de ser el caso, a la Administración educativa, de las alteraciones de la convivencia, guardando reserva y sigilo profesional sobre la información y las circunstancias personales y familiares del alumnado.
- d) Guardar sigilo y confidencialidad respecto a las actuaciones relacionadas con el ámbito educativo de las que tuvieran conocimiento.

**TÍTULO III**  
**Normas básicas de convivencia en los centros docentes**

**CAPÍTULO I**  
**Disposiciones generales**

***Artículo 10. Plan de convivencia y normas de convivencia***

1. El proyecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recoja y desarrolle los fines y principios establecidos en el artículo 3 de esta ley **y los regulados en las Leyes orgánicas sobre la materia**. Dicho plan integrará el principio de igualdad entre mujeres y hombres y establecerá, **sobre la base de un diagnóstico previo**, las necesidades, los objetivos, las directrices básicas de convivencia, **las actuaciones, incluyendo la mediación en la gestión de los conflictos**, y contendrá actuaciones preventivas, reeducadoras y correctoras. **El plan de convivencia será elaborado por una comisión de convivencia o, cuando esta no esté constituida, por la dirección y aprobado por el consejo escolar del centro.**

2. Las normas de organización y funcionamiento de cada centro docente incluirán las normas de convivencia que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia. Estas normas serán públicas y los centros docentes facilitarán su conocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

3. En particular, las normas de convivencia de cada centro concretarán los derechos y deberes del alumnado y establecerán **las conductas contrarias a la convivencia y las correcciones que correspondan a su incumplimiento**, en el marco de lo dispuesto por este título y de las disposiciones reglamentarias que lo desarrollen.

4. Asimismo, las normas de convivencia podrán contener previsiones sobre el atuendo o vestimenta del alumnado, orientadas a garantizar que el mismo no atente contra su dignidad, no suponga una discriminación por razón de sexo, un riesgo para su salud e integridad personal y la de los demás miembros de la comunidad educativa, o impida o dificulte la normal participación del alumnado en las actividades docentes.

***Artículo 11. Condición de autoridad pública del profesorado***

1. En el ejercicio de las funciones directivas y organizativas, docentes y de corrección disciplinaria, el profesorado tiene la condición de autoridad pública y disfruta de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

2. En el ejercicio de las funciones de corrección disciplinaria, los hechos constatados por el profesorado y que se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente tienen presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en su defensa pueda señalar o mostrar el alumnado o sus representantes legales cuando sean menores de edad.

3. El profesorado está facultado para requerir al alumnado, dentro del recinto escolar y también durante la realización de actividades complementarias y extraescolares, la entrega de cualquier objeto, sustancia o producto que porte y que esté expresamente prohibido por las normas del centro, resulte peligroso para su salud o integridad personal o la de los demás miembros de la comunidad educativa, o pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades docentes, complementarias o extraescolares.

El requerimiento previsto en este apartado obliga a la alumna o alumno requerido a la inmediata entrega del objeto, que será depositado por el profesorado en la dirección del centro con las debidas garantías, quedando a disposición de la madre y padre o tutora o tutor, si la alumna o alumno que lo portase fuese menor de edad, o de la propia alumna o alumno, si fuera mayor de 18 años, una vez terminada la jornada escolar o la actividad complementaria o extraescolar, todo eso sin perjuicio de las correcciones disciplinarias que puedan corresponder.

#### ***Artículo 12. Incumplimiento de las normas de convivencia***

1. Serán objeto de corrección disciplinaria las conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas por el alumnado dentro del recinto escolar o durante el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar.

2. Asimismo, podrán corregirse disciplinariamente las conductas del alumnado que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o compañeras o a otros miembros de la comunidad educativa y, en particular, las actuaciones que constituyan acoso escolar conforme a lo establecido por el artículo 26.

Las conductas realizadas mediante el uso de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan conexión con la actividad escolar se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

#### ***Artículo 13. Responsabilidad y reparación de daños***

1. El alumnado está obligado a reparar los daños que cause, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones y a los materiales de los centros docentes, incluidos los equipos informáticos y el software, y a los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, están obligados a restituir lo sustraído o, si no fuera posible, a indemnizar su valor. Las madres y padres o tutoras o tutores serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.

2. Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la



naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que, de ser el caso, determine la resolución que imponga la corrección de la conducta.

3. El régimen de responsabilidad y reparación de daños establecido en este artículo es compatible con las correcciones disciplinarias que, de ser el caso, correspondan.

## **CAPÍTULO II**

### **Conductas contrarias a la convivencia y su corrección**

#### **Sección 1.<sup>a</sup>**

#### **Conductas contrarias a la convivencia**

#### ***Artículo 14. Clases de conductas contrarias a la convivencia***

1. Las conductas contrarias a la convivencia en los centros docentes se clasifican en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y conductas leves contrarias a la convivencia, de acuerdo con lo establecido en esta sección.

2. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, deberán comunicarse al Ministerio Fiscal y a la Administración educativa, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas.

#### ***Artículo 15. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia***

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros docentes:

a) Las agresiones físicas o psíquicas, las injurias y las ofensas graves, las amenazas y las coacciones contra los demás miembros de la comunidad educativa.

b) Los actos de discriminación grave contra miembros de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c) Los actos colectivos de desafío a la autoridad del profesorado que constituyan una indisciplina grave.

d) La grabación, la manipulación y la difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones que atenten contra el derecho a la honra, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa.

e) Las actuaciones que constituyan acoso escolar conforme a lo establecido por el artículo 26

de esta ley.

f) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, alteración o sustracción de documentos académicos.

g) Los daños graves causados de forma intencionada o por negligencia grave a las instalaciones y a los materiales de los centros docentes, incluidos los equipos informáticos y el software, o a los bienes de otros miembros de la comunidad educativa o de terceros, así como su sustracción.

h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro, incluidas las de carácter complementario y extraescolar.

i) Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.

j) Portar cualquier objeto, sustancia o producto gravemente peligroso para la salud o la integridad personal del alumnado o de los demás miembros de la comunidad educativa. En todo caso, se reputará indisciplina grave la resistencia o negativa a entregar los objetos a que se refiere el apartado tercero del artículo 11 de esta ley cuando se es requerido para eso por el profesorado.

k) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas leves contrarias a la convivencia.

l) El incumplimiento de las sanciones impuestas.

### ***Artículo 16. Conductas leves contrarias a la convivencia***

Se consideran conductas leves contrarias a la convivencia:

a) Las conductas tipificadas como agresión, injuria u ofensa en el apartado a), los actos de discriminación del apartado b), los actos de indisciplina del apartado c), los daños del apartado g), los actos injustificados del apartado h) y las actuaciones perjudiciales descritas en el apartado i) del artículo anterior que no alcancen la gravedad requerida en dicho precepto.

b) Portar cualquier objeto, sustancia o producto expresamente prohibido por las normas del centro, peligroso para la salud o la integridad personal del alumnado o de los demás miembros de la comunidad educativa, o que perturbe el normal desarrollo de las actividades docentes, complementarias o extraescolares, cuando no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia de acuerdo con el apartado j) del artículo anterior.

c) La inasistencia injustificada a clase y las faltas reiteradas de puntualidad, en los términos establecidos por las normas de convivencia de cada centro docente.

d) La reiterada asistencia al centro sin el material y equipación precisa para participar

activamente en el desarrollo de las clases.

e) Las demás conductas que tipifiquen las normas de convivencia de cada centro docente.

### ***Artículo 17. Prescripción de las conductas contrarias a la convivencia***

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros docentes tipificadas en esta sección prescriben a los cuatro meses de su comisión y las conductas leves contrarias a la convivencia al mes.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la conducta se llevó a cabo, salvo cuando se trate de una conducta continuada, caso en el que el plazo de prescripción no se empezará a computar mientras aquella no cese.

3. En el caso de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento para la corrección de la conducta, continuándose el cómputo del plazo de prescripción para el caso de producirse la caducidad del procedimiento.

## **Sección 2.<sup>a</sup> Medidas correctoras**

### ***Artículo 18. Principios generales de las medidas correctoras***

1. Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto de los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de la convivencia en el centro docente.

2. En todo caso, en la corrección de las conductas contrarias a la convivencia se aplicarán los siguientes principios:

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. Para estos efectos, no se entenderá como privación del derecho a la educación la imposición de las correcciones previstas en esta sección que suponen la suspensión de la asistencia a las clases o el cambio de centro.

b) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado.

c) La imposición de las correcciones previstas en esta sección respetará la proporcionalidad con la conducta del alumnado y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) Se tendrá en cuenta la edad del alumnado y las demás circunstancias personales, familiares

y sociales. Para estos efectos, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las mencionadas circunstancias y recomendar, de ser el caso, a las madres y padres o a las tutoras o tutores o a las autoridades públicas competentes la adopción de las medidas necesarias.

#### ***Artículo 19. Programas y actuaciones complementarias a las medidas correctoras***

1. Como complemento de las medidas correctoras previstas en esta sección, el departamento de orientación de cada centro docente elaborará y desarrollará un programa de habilidades sociales dirigido al alumnado que incurra reiteradamente en conductas disruptivas, con la finalidad de mejorar su integración en el centro docente. Asimismo, elaborará y desarrollará un programa de habilidades sociales para aquel alumnado que, como consecuencia de la imposición de las medidas correctoras previstas en esta sección, se vea temporalmente privado de su derecho de asistencia al centro.

2. Estos programas se aplicarán en colaboración con el profesorado tutor y, de ser el caso, los servicios sociales, y procurarán implicar al resto del profesorado y a las familias para lograr, conjuntamente, el desarrollo adecuado del proceso educativo y de las acciones propuestas.

#### ***Artículo 20. Procedimientos conciliados de resolución de los conflictos***

1. Reglamentariamente se determinará un procedimiento conciliado para la resolución de los conflictos de convivencia. Tendrá carácter voluntario la solicitud del alumnado o de sus representantes legales y exigirá el compromiso de cumplimiento de las acciones reparadoras.

2. La opción por la conciliación suspende el inicio del procedimiento disciplinario de corrección de la conducta, que se reanudará en caso de que la conciliación sea infructuosa. El cumplimiento de las acciones reparadoras dará lugar a la finalización del procedimiento de corrección de la conducta contraria a la norma de convivencia.

3. En el procedimiento, formalizado por escrito, se incluirá la intervención de una persona instructora y de una persona mediadora.

#### ***Artículo 21. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia***

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros docentes pueden ser corregidas con las siguientes medidas:

a) Realización, dentro o fuera del horario lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora e y desarrollo de las actividades del centro.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro por un período de entre dos semanas y un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de entre cuatro días lectivos y dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá

realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

e) Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de entre cuatro días lectivos y un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

f) Cambio de centro.

### ***Artículo 22. Medidas correctoras de las conductas leves contrarias a la convivencia***

Las conductas leves contrarias a la convivencia pueden ser corregidas con las siguientes medidas:

a) Amonestación personal o por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante la persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros concertados.

c) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.

d) Realización, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro.

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro por un período de hasta dos semanas.

f) Cambio de grupo por un período de hasta una semana.

g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de hasta tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

h) Suspensión temporal del derecho de asistencia al centro por un período de hasta tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

### ***Artículo 23. Graduación de las medidas correctoras***

Para la graduación de las medidas correctoras previstas en esta sección se tomarán en consideración especialmente los siguientes criterios:

a) El reconocimiento espontáneo del carácter incorrecto de la conducta y, de ser el caso, el cumplimiento igualmente espontáneo de la obligación de reparar los daños producidos en los términos previstos por el artículo 13 de esta ley.

- b) La existencia de intencionalidad o reiteración en las conductas.
- c) La difusión por cualquier medio, incluidos los electrónicos, telemáticos o tecnológicos, de la conducta, de sus imágenes o de la ofensa.
- d) La naturaleza de los perjuicios causados.
- e) El carácter especialmente vulnerable de la víctima de la conducta, si se trata de un alumno o de una alumna, por razón de su edad, de reciente incorporación al centro o cualquier otra circunstancia.

#### ***Artículo 24. Prescripción de las medidas correctoras***

Las medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los centros docentes previstas en esta sección prescriben al año de la firmeza en vía administrativa de la resolución que las impone. Las medidas correctoras de las conductas leves contrarias a la convivencia prescriben a los cuatro meses de su imposición.

### **Sección 3.ª**

#### **Procedimiento para la imposición de las medidas correctoras**

#### ***Artículo 25. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia***

1. Las medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia sólo se pueden imponer luego de la tramitación del procedimiento disciplinario regulado en este artículo.
2. Corresponde acordar la incoación del procedimiento a la persona titular de la dirección del centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada del profesorado o de la tutora o tutor de la alumna o alumno o de la persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros concertados, o después de denuncia de otros miembros de la comunidad educativa.

La incoación del procedimiento se notificará a la madre y al padre o a la tutora o tutor del alumnado, o a este si es mayor de edad, con indicación de la conducta que lo motiva, las correcciones que pueden corresponder y el nombre de la profesora o profesor que actuará como persona instructora. Asimismo, se comunicará a la inspección educativa.

4. En el propio acuerdo de incoación o en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, la persona titular de la dirección del centro puede adoptar motivadamente como medidas provisionales el cambio temporal de grupo de la alumna o alumno o la

suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o actividades, por un período no superior a cinco días lectivos. La adopción de medidas provisionales se notificará a la madre y al padre o a la tutora o tutor del alumnado, o a este si es mayor de edad.

5. Finalizada la instrucción del procedimiento, la persona instructora formulará propuesta de resolución y dará audiencia a la alumna o alumno y, si es menor de edad, a la madre y al padre o a la tutora o tutor, convocándolos a una comparecencia en horario lectivo en la que podrán acceder a todo lo actuado y de la cual se levantará acta. En caso de incomparecencia injustificada, el trámite de audiencia se tendrá por realizado a todos los efectos legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25 de esta ley.

6. Cumplimentado el trámite de audiencia, la persona titular de la dirección del centro dictará resolución motivada que se pronunciará sobre la conducta de la alumna o alumno e impondrá, de ser el caso, la correspondiente corrección, así como la obligación de reparar los daños producidos en los términos previstos por el artículo 13 de esta ley.

La resolución se notificará a la madre y al padre o la tutora o tutor de la alumna o alumno, o a estos si son mayores de edad, en un plazo máximo de doce días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la incoación del procedimiento, y se comunicará a la inspección educativa.

La resolución de la persona directora pone fin a la vía administrativa y será inmediatamente ejecutiva. Contra la resolución de la persona directora cabe instar a revisión ante el Consejo escolar en el plazo de 10 días lectivos en los términos previstos en el apartado f) del artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación.

#### ***Artículo 26. Procedimiento para la imposición de medidas correctoras de conductas leves contrarias a la convivencia***

La imposición de las medidas correctoras de conductas leves contrarias a la convivencia se llevará a cabo:

a) Por el profesorado de la alumna o alumno, oído esta o este y dando cuenta a la persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros concertados, en el caso de las medidas previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 20 de esta ley.

b) Por el tutor o tutora del alumnado, oído este y dando cuenta a la persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros concertados, en el caso de las medidas previstas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 20 de esta ley.

c) Por la persona que ocupe la jefatura de estudios o persona que ejerza funciones equivalentes en los centros concertados o por la persona titular de la dirección del centro, oídos el alumnado y su profesor o profesora o tutor o tutora, en el caso de las medidas previstas en los apartados a), c), d), e) y f) del artículo 20 de esta ley.

d) Por la persona titular de la dirección del centro, oídos el alumnado y su profesor o profesora o tutor o tutora, en el caso de las medidas previstas en los apartados g) y h) del artículo 20 de esta ley. La imposición de estas medidas correctoras se comunicará a la madre y al padre o la tutora o tutor del alumnado antes de que las mismas se hagan efectivas, así como al Observatorio de la Convivencia Escolar del centro.

2. Las resoluciones que imponen las medidas correctoras a las que se refiere este artículo ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivas.

#### ***Artículo 27. Responsabilidad de las madres y padres o tutoras o tutores***

Las audiencias y comparencias de las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado menor de edad en los procedimientos disciplinarios regulados en esta sección son obligatorias para los mismos y su desatención reiterada e injustificada será comunicada a las autoridades competentes a los efectos de su posible consideración como incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o la tutela.

### **CAPÍTULO III**

#### **Prevención y tratamiento de las situaciones de acoso escolar**

#### ***Artículo 28. Acoso escolar***

Para los efectos de esta ley, se considera acoso escolar cualquier forma de vejación o malos tratos continuados en el tiempo de un alumno o de una alumna por otro u otra u otros, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se produzca. Tendrán la misma consideración las conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan causa en una relación que surja en el ámbito escolar.

#### ***Artículo 29. Protección integral de las víctimas***

La dirección de los centros docentes y los titulares de los centros concertados, así como la Administración educativa, procurará garantizar al alumnado víctima de situaciones de acoso escolar la protección integral de su integridad y dignidad personales y de su derecho a la educación, debiendo primar siempre el interés de la víctima sobre cualquier otra consideración en el tratamiento de estas situaciones.

#### ***Artículo 30. Medidas para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de acoso escolar***

1. El plan de convivencia de cada centro docente incluirá un protocolo para la prevención, detección y tratamiento de las situaciones de acoso escolar, que incorporará, como mínimo,



las siguientes previsiones:

a) Realización de campañas de sensibilización del profesorado, las madres y padres o tutoras o tutores y al alumnado contra el acoso escolar, que ayuden a prevenirlo y preparen a todos los miembros de la comunidad educativa para detectarlo y reaccionar frente al mismo.

b) Establecimiento de canales específicos que faciliten la exteriorización por las víctimas de las situaciones de acoso escolar.

c) Determinación de las medidas que se deben adoptar en el caso de detección de una situación de acoso escolar para poner fin a la misma, sin perjuicio de las correcciones disciplinarias que correspondan. En todo caso, se preverá la designación por la persona titular de la dirección del centro o titular del centro concertado de un responsable de la atención a la víctima entre el personal del propio centro docente, procurando, cuando sea posible, que la designación recaiga sobre una persona con la que la víctima guarde una relación de confianza o proximidad.

2. Cuando por razón de la gravedad de la situación de acoso se haga preciso, se podrá prever la intervención de mediadores ajenos al personal del centro, que serán designados por la Administración educativa.

3. Las situaciones de acoso escolar que se detecten serán comunicadas a la inspección educativa, junto con las medidas que se adopten para poner fin a las mismas. En el caso de conductas de especial gravedad, se informará de la situación y de las medidas a los servicios sociales del correspondiente Ayuntamiento, los servicios especializados de la Secretaría General de Familia y Bienestar y, en su caso, al Fiscal de Menores para facilitar las medidas que les corresponda adoptar en sus respectivos ámbitos competenciales.

## **TÍTULO IV**

### **Participación directa de las familias y de los restantes miembros de la comunidad educativa en la enseñanza y en el proceso educativo**

#### ***Artículo 31. Procedimientos de consulta y participación directa en la enseñanza***

1. Para hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus hijos y hijas y garantizar la colaboración efectiva entre la familia y la escuela, la Administración educativa podrá establecer procedimientos de consulta y participación directa de las familias. Estos procedimientos podrán extenderse a otros miembros de la comunidad educativa.

2. Los procedimientos previstos en este artículo tendrán como finalidad solicitar las preferencias individuales o colectivas de las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado, del propio alumnado si es mayor de edad y, de ser el caso, de otros miembros de la comunidad educativa, sobre aspectos determinados de la programación general de la

enseñanza.

3. En ningún caso podrán ser objeto de consulta los aspectos de la programación general de la enseñanza regulados directamente por normas con rango de ley o que deban ser regulados por la ley por disposición constitucional.

***Artículo 32. Principios generales y garantías de los procedimientos de consulta y participación directa***

1. Los procedimientos de consulta y participación directa se convocarán por orden de la persona titular de la consellería competente en materia de Educación antes del inicio del curso escolar en el que los resultados de los mismos se tendrán en cuenta para la adopción de las correspondientes decisiones en la enseñanza por parte de la Administración educativa.

La orden de convocatoria deberá publicarse en el “Diario Oficial de Galicia” con una antelación mínima de quince días con respecto a la iniciación del procedimiento y establecerá, como mínimo:

a) El carácter meramente orientativo o el grado de vinculación que para la Administración educativa y los centros docentes tendrán los resultados del procedimiento.

b) Las garantías que procedan de acuerdo con la finalidad y el carácter del procedimiento para asegurar la protección de los datos de carácter personal de los participantes, la autenticidad de las opiniones individuales emitidas y de los resultados globales y la neutralidad de la Administración educativa y de los centros docentes en la adopción de decisiones derivadas del procedimiento.

c) El plazo de duración del procedimiento, que no podrá ser inferior a un día natural ni superior al período de matrícula que se establezca en las normas de admisión en los centros docentes.

3. Los procedimientos de consulta y participación directa podrán realizarse mediante la utilización de medios electrónicos, bien en los propios centros docentes, bien telemáticamente respetando las garantías establecidas en la legislación sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y a la protección de datos.

***Artículo 33. Acceso de las madres y padres o tutoras o tutores al profesorado y a los equipos directivos de los centros docentes***

1. Las disposiciones que regulen la distribución del horario semanal individual del profesorado garantizarán la disponibilidad de este, tenga o no la condición de tutora o tutor, para la atención a las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado.

2. Se garantizará igualmente la disponibilidad de los miembros de los equipos directivos de los centros docentes para la atención a las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado.

3. Al dar cumplimiento a lo previsto en este artículo, se cuidará de manera especial de que las horas de atención a las madres y padres o tutoras o tutores sean razonablemente compatibles, dentro del horario del centro, con las obligaciones laborales y familiares de estos.

## **DISPOSICIONES ADICIONALES**

### ***Disposición Adicional Primera. Asistencia jurídica al profesorado***

La Administración educativa promoverá las medidas oportunas para garantizar la adecuada protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros docentes públicos, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar. En todo caso, el profesorado de estos centros disfrutará del derecho a la representación y defensa en juicio en los términos establecidos en la normativa reguladora de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia.

### ***Disposición Adicional Segunda. Medios electrónicos de comunicación***

La Administración educativa fomentará la generalización en los centros docentes de la utilización de medios electrónicos de comunicación con las madres y padres o tutoras o tutores del alumnado, con la finalidad de agilizar la comunicación con estos y facilitarles así el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que les corresponden en relación con la educación de sus hijos o hijas o pupilos o pupilas.

### ***Disposición Adicional Tercera. Medidas complementarias***

1. Las disposiciones reglamentarias que desarrollan el régimen de los miembros de los equipos directivos de los centros docentes garantizarán la adecuación del mismo a las funciones, tareas y responsabilidades que para aquellos derivan de la aplicación de la presente ley.
2. Los planes de formación del profesorado incluirán acciones específicamente dirigidas a preparar a aquel para el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de los deberes que, en relación con la convivencia escolar, le corresponden de acuerdo con esta ley.

### ***Disposición Adicional Cuarta. Centros privados sostenidos con fondos públicos***

1. En los centros privados sostenidos con fondos públicos la aplicación de la presente Ley se ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento respetando, en todo caso, las atribuciones de competencias establecidas en la legislación vigente.

### ***Disposición Adicional Quinta. Guarda y acogimiento***

1. Las referencias de esta Ley a las madres, padres, tutoras y tutores se entenderán hechas a las personas que ostenten la guarda o acogimiento por resolución judicial o administrativa.

## **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

### ***Disposición Transitoria Primera. Procedimientos disciplinarios en tramitación***

Los procedimientos disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose conforme a la normativa aplicable con anterioridad a la misma.

### ***Disposición Transitoria Segunda. Normativa reglamentaria de desarrollo***

Mientras no entren en vigor las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley, seguirá siendo de aplicación en materia de convivencia en los centros docentes el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia, en lo que no resulte incompatible con la presente ley. En todo caso, los plazos y el procedimiento de corrección de las conductas contrarias a la convivencia se adaptarán a lo previsto en esta ley.

## **DISPOSICIONES DEROGATORIAS**

### ***Única. Derogación normativa***

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley.

## **DISPOSICIONES FINALES**

### ***Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario***

El Consello de la Xunta de Galicia dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.

***Disposición Final Segunda. Entrada en vigor***

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de Galicia”.

El Conselleiro de Presidencia,  
Administracións Públicas e Xustiza

Alfonso Rueda Valenzuela